

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Rancagua
CAUSA ROL : C-975-2023
CARATULADO : LORCA/FISCO DE CHILE -SUBSECRETARÍA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Rancagua, veinticuatro de Junio de dos mil veinticuatro

Vistos:

Demanda.- En folio 1 comparece doña **Jertrudis Yolanda Mella Correa**, dueña de casa con domicilio en Villa San Agustín, calle Gabriela Mistral N° 355, Cunaco, doña **Patricia Mella Correa**, dueña de casa con domicilio en Las Malvas 541, Chile Nuevo San Fernando, y don **Juan Raúl Lorca Muñoz**, comerciante, con domicilio en calle Matte 1273, Población San Martín, San Fernando, quienes vienen en deducir demandade indemnización de perjuicios en juicio de hacienda en contra del **Fisco de Chile**, representado por doña Lya Gabriela Hald Ramírez, Abogado Procurador Fiscal de Rancagua del Consejo de Defensa del Estado, domiciliada en calle Rubio N° 285, Of. 710, de la comuna y ciudad de Rancagua.

Fundan su demanda en su calidad de detenidos, torturados y/o condenados políticos,

Respecto de doña Jertrudis Yolanda Mella Correa, expresa que su padre en 1968 fue electo Regidor por el Partido Socialista en Rancagua y su madre en 1973 fue designada presidenta de la junta de abastecimiento. Refiere que tras el golpe de estado su vida cambió radicalmente, al ser detenida el 29 de octubre de 1973, en el Servicio de Seguro Social de Santa Cruz, en donde era cajera, siendo trasladada a la prefectura de Carabineros de San Fernando, donde estaba detenido su padre, quien fue dejado en libertad mientras ella seguía incomunicada toda la noche, siendo luego trasladada a la Tenencia de Carabineros de Peor es Nada, quedando en una celda en condiciones



Foja: 1

precarias. El 30 de octubre es trasladada a la cárcel de San Fernando incomunicada, permaneciendo 7 días en celda oscura en condiciones desmejoradas, la llevaban al baño una vez al día, y no podía ver la luz del día. Fue luego trasladada a otra celda con otras mujeres.

Indica que a los días llega a la cárcel su hermana Patricia, siendo ambas ahí victimas de abusos sexuales, las que marcaron su vida. El 24 de diciembre de 1973, en el Consejo de Guerra es condenada a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio.

Señala que producto de lo anterior padece estrés severo, siendo atendida por psiquiatra y sicólogo, sumida en una depresión por los eventos traumáticos vividos entre octubre de 1973 y octubre de 1975.

Respecto de doña Patricia Mella.- Refiere que el 12 de noviembre de 1973 se dirigió a la comisaría de San Fernando a preguntar por su hermana Jertrudis, desde Copiapó, y en ese lugar le indican que no le pueden dar información, luego, caminando hacia la plaza es rodeada por tres carabineros quienes la golpean con la ametralladora, y la ingresan a la comisaría, quedando incomunicada 10 días, siendo insultada y golpeada en diversas partes de su cuerpo.

Refiere haber sido interrogada intensamente por el Capitán Courtis, quien en estado de ebriedad y con insultos y amenazas le dio diversas promesas si accedía a un examen sexual arrojando que fuera virgen, mientras le tocaba su cuerpo y piernas, intentando escapar con lo que el Capitán dispara su arma, llegando otros dos carabineros que la llevaron a su celda, quedando incomunicada hasta el 22 de noviembre de 1973, en donde es trasladada a la cárcel y se encuentra con su hermana, lugar en donde además le hicieron careos, padeció golpes y le pusieron corrientes en sus genitales.

Respecto de don Juan Lorca Muñoz.- indica que a los 17 años fue allanado su hogar y es detenido y llevado a la Comisaría de Nancagua, y luego a la comisaria de San Fernando, quedando incomunicado en una celda por aproximadamente 12 días sin alimentación, ni abrigo, siendo víctima de torturas y apremios por parte de Carabineros, mediante aplicación de electricidad, amenazas de fusilamiento y prohibición de dormir.



Foja: 1

Luego de declarar en la fiscalía es nuevamente incomunicado por 15 días, finalmente es procesado con una pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo. Al faltar un año de su condena le dan libertad condicional.

Refiere quedar con fractura de clavícula izquierda.

En cuanto al derecho refiere que los hechos expuestos forman parte del catálogo de crímenes reconocidos como de lesa humanidad, y concurren dos fuentes normativas principales, la Constitución y el derecho público internacional. Acto seguido transcribe los artículos 38 inciso segundo, 1 inciso cuarto, 5 inciso 2, todos de nuestra Carta Magna para señalar que para que opere la responsabilidad objetiva de la administración basta la lesión de un derecho, que sea causado por un agente del estado en funciones, y la relación causal entre los mismos.

Indica que el Estado, mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional o bien, concurriendo con su voto a la aprobación de resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, ha adquirido una serie de obligaciones que responden a la obligación general de respeto de los derechos esenciales del hombre por parte de los Estados. Así las cosas, en materia de Derechos Humanos, los Estados tienen una obligación de resultado, cual es la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los tratados internacionales. En lo concreto y respecto de la normativa aplicable en la materia es dable señalar que el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece un deber general de reparación a favor del lesionado en el goce de un derecho o libertad conculcado. Mandata expresamente a la Corte Interamericana, cuando ella constate que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención a ordenar reparar las consecuencias de vulneración de esos derechos y al pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Este deber no se encuentra obviamente restringido al órgano jurisdiccional internacional, sino que estamos frente a un mandato normativo de carácter internacional pero internalizado en el nuestro, internalizado con la ratificación por Chile de la Convención, mandato que compromete al Estado a adoptar las medidas legislativas u otras de adecuación del derecho interno, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.



Foja: 1

Finalmente, y previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco De Chile, someterla a tramitación, y en definitiva, se condene al Fisco de Chile a pagar a los demandantes la suma de \$80.000.000.- para cada uno de ellos, en un monto total de \$240.000.000.- por concepto de daño moral; y en subsidio de lo anterior, a la suma que se estime, más los reajustes e intereses y costas.

Notificación.- En folio 13, se notifica personalmente la demanda a la abogada procuradora fiscal de Rancagua.

Contestación.- En folio 14, el Fisco de Chile, procede a evacuar contestación de la demanda, incoando en primer lugar las siguientes excepciones:

1.-Excepción de improcedencia de la acción por limitación de la justicia transicional.

Señala que esta indemnización se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas, porque no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad, pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en nuestro país.

Arguye que la ley 19.992 ha constituido un esfuerzo trascendental de reparación, pues mediante ella se hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de prisión política y tortura mediante prestaciones en dinero, lo que permitió y permite que numerosas víctimas obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido



Foja: 1

satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos. Así, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Indica que esta ley además otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, la ley 20.874 determinó un Aporte Único de Reparación, por \$1.000.000 para cada una de las víctimas individualizadas en las nóminas Valech y de \$ 600.000 a favor de cada una de las viudas de dichas víctimas. Ahora bien, para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar a la víctima de prisión política y tortura, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfacias a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagrazos de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, como se explicará. Ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Señala que, siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa.

Manifiesta que la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación los afectados directamente por el daño y tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido. Estos programas incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo,



Foja: 1

basadas en complejas negociaciones. El cúmulo de reparaciones indicadas ha producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente. Los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables en relación con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DD.HH.

Arguye que es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación. Estando entonces las acciones alegadas en estos autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatoria, ya enunciadas, y al tenor de los documentos oficiales que ratificarán la percepción de los referidos beneficios, y que serán acompañados en su oportunidad, es que opone la excepción de reparación satisfactiva.

2.- Opone además la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita ésta, se rechacen las demandas en todas sus partes. Según el relato factico del demandante, los hechos se habrían producido entre septiembre y octubre de 1973.

Indica que, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 08 de marzo de 2023, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.



Foja: 1

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil,

ya que entre la fecha en que se habrían hecho exigibles los derechos a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil. Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”* I. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 8 abril 1982. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXXX, Sec. 2ª, p. 38, citada por Domínguez Águila, Ramón, *La prescripción extintiva*. Editorial Jurídica de Chile. 1ª Ed. 2004, p. 148, Nota 411

Manifiesta que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido.

Finalmente, expresa que la jurisprudencia ha declarado que rige la prescriptibilidad de la acción civil, conforme sentencia del 21 de enero de 2013 de nuestro Máximo Tribunal en Pleno, y a su vez la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Acto seguido manifiesta que, no habiendo, en consecuencia, norma especial que disponga un plazo determinado debe recurrirse al derecho común y aplicar las normas contenidas en el artículo 2.332 del Código Civil, que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto.



Foja: 1

En subsidio de las defensas y excepciones de reparación satisfactiva y prescripción precedentes, opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos.

Con relación al daño moral hacen presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. A mayor abundamiento, tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Expresa que en tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta claramente excesiva, teniendo especialmente en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

Finalmente, y en relación a la petición de reajustes e intereses, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Pues bien, a la fecha de notificación de las demandas de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene la demandada de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Manifiesta que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, resulta absurdo pretender aplicar la



Foja: 1

corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

Indica respecto de los intereses, que el artículo 1.551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Por consiguiente, de acogerse las acciones de autos y condenar al Fisco al pago de indemnizaciones de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el demandado incurra en mora.

Réplica.- En folio 17, la demandante procede a evacuar réplica, reiterando lo expuesto en la demanda y procediendo a citar fallos en torno a las excepciones promovidas.

Dúplica.- En folio 19, la parte demandada viene en evacuar el trámite de la dúplica, instancia en la que ratifica todo lo expuesto en su contestación.

Interlocutoria de prueba.- En folio 20, se recibe la causa a prueba, fijándose los hechos controvertidos, pertinentes y sustanciales.

Citación a oír sentencia.- En folio 42, se cita a las partes a oír sentencia.

Considerando:

Primero: Que, habiéndose demandado en contra del Fisco de Chile por indemnización de perjuicios en sede de falta de servicio, corresponde analizar la controversia en autos en torno a los hechos y fundamentos de derecho indicados por el actor y las defensas invocadas por la parte demandada.

Segundo: Que, de la contestación promovida en folio 8 se advierte que no ha sido controvertido por el Fisco de Chile ninguno de los hechos relatados por los demandantes en el libelo en torno al momento y forma en que acontecieron las circunstancias que describe como vejatorios o lesivos a su integridad física y psicológica, sino únicamente se defiende en torno a la reparación de tales daños ya realizada, la prescripción de la acción, lo excesivo del monto invocado como daño moral y la determinación de reajustes e intereses.



Foja: 1

Conforme lo anterior no cabe sino considerar como hecho pacífico que cada uno de los actores, se vio afecto a una serie de situaciones que limitaron su libertad personal, su bienestar físico y mental y que acontecieron en el año 1974, en la forma y tiempos explicados en el libelo, así como en los expositivo de esta sentencia.

Tercero: Que, a fin de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió las siguientes probanzas:

Documental:

1. Cédulas de identidad de los tres demandantes.
2. Copia de sentencia N° 20 de 24 de diciembre de 1973.
3. Certificado N° 1 del 10 de enero de 1977.
- 4.- Recorte del diario La Región de 10 de enero de 1974.
- 5.- 3 certificados médicos extendidos por psiquiatra Juan Díaz Menares, de fechas 12 y 19 de diciembre de 2022.
- 6.- Nómina de personas reconocidas como víctimas del Informe Valech, páginas 660, 669.
- 7.- dos copias simples de documentos reunidos por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura respecto de los demandantes Sr. Lorca, y Sra. Jertrudis Mella.
- 8.- Copia de la ficha médica Hospital de San Fernando, del Sr. Lorca.

Testimonial.- A su vez, en folio 43 consta prueba testimonial, compareciendo don Teodoro Ricardo Valdés Ramírez y doña Mónica Margarita Betancourt García, quienes previamente juramentados, han procedido a declarar al tenor de la interlocutoria de prueba.

Cuarto: Que, la parte demandada aparejó probanza documental en folio 34, a saber, ordinarios remitidos por el Instituto de Previsión Social, en el que se detallan los beneficios obtenidos del Estado por los actores.



Foja: 1

Quinto: Que, los actores en la demanda han expresado que los hechos delictivos son propios del delito de lesa humanidad; y dicha tipificación no fue contrariada por la demandada, quien derechamente ha procedido a excepcionar la existencia de reparación integral para estos casos y de prescripción, expresando respecto de esta última que el carácter de imprescriptible de la acción penal emanada de este tipo de delitos no implica la imprescriptibilidad también de la acción civil, por lo que ha de considerarse otro hecho pacífico del proceso.

En cuanto a la excepción de improcedencia de la indemnización por aplicación de justicia transicional que deriva en la reparación integral .

Sexto: Que, entrando ahora la excepción de improcedencia de la indemnización por aplicación de justicia transicional que deriva en la reparación integral incoada en primer lugar por la parte demandada, cabe señalar al respecto que la Ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una supuesta incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que: “en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

Aunado a lo anterior, la precitada ley no ha establecido una incompatibilidad entre los beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial; con lo que, no se verifica la existencia de antecedentes o motivos que conlleven presumir que el mencionado estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño sufrido por las víctimas de derechos humanos sin distinción alguna.



Foja: 1

Luego, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, desde la mirada objetiva y resarcitoria, no importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta declare la procedencia de una reparación por daño.

Conforme aquello, es dable concluir que los beneficios establecidos en las Leyes N° 19.123 y N° 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño, cuya cuantía, y para el caso que sea procedente, será determinada en este juicio.

Séptimo: Que, en consecuencia, la acción por indemnización impetrada no resulta incompatible con cualquier otro tipo de beneficio que pudiese haber favorecidos al actor, a cualquier título y en cualquier momento, en este sentido el hecho que el demandante pudiese ser beneficiario de un sistema de previsión de salud especial, de gestos simbólicos, u otras medidas no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales ha sido víctima directa, por cuanto interpretarlo en la forma contraria necesariamente conllevaría a entender que el dolor, pesar o angustia que se alega en razón de las vejaciones vividas y sufridas durante la época del golpe de estado, encuentra una cuantía predefinida por ley. En los hechos, no existe un parámetro objetivo al respecto, sino que se encuentra entregado a la prudencia judicial.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva.

Octavo: Que, conociendo ahora de la excepción de prescripción, necesario se hace señalar que las normas de Derecho Internacional han establecido, como criterio general, que, ante actos vejatorios asimilados como delitos de lesa humanidad por parte de un Estado, surge para las víctimas la posibilidad de solicitar se sancione a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos por contravenir derechos reconocidos por el Derecho Internacional. Así, tenemos que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos – también llamado Pacto de San José de Costa Rica-, que tuvo en Chile su promulgación el día 05 de enero de 1991, mediante el decreto N° 873, señala que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la



Foja: 1

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. Asimismo, el numeral 1.- del artículo primero del Tratado, en relación a la obligación que deben cumplir los Estados, expresa que: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. En directa concordancia con lo anterior, el artículo quinto protege la integridad personal de las personas, indicando que: “...1.- *Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2.- Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano...*”

Noveno: Que, la presente demanda ha buscado la responsabilidad del Estado basada en el artículo 4 de la Ley de Bases Generales de la Administración, asumiendo la parte demandante que corresponde atribuir al Estado de Chile los perjuicios que señalan respecto de los hechos soportados y vividos por el actor en el año 1974 por acción de agentes del Estado.

Pues bien, el artículo 2332 del Código Civil señala que: “Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto;” si se tomare en consideración la norma sacada a la letra deberías entender que la acción incoada se encontraría prescrita, pues, habiendo acontecido la notificación al Fisco de Chile el día 09 de noviembre de 2023, a esa fecha se encontraría cumplido el plazo recién citado, teniendo en cuenta que el hecho ilícito que se invoca contra el Estado aconteció en el año 1974. Sin embargo, los hechos acontecidos y pacíficos en autos requieren necesariamente ser objeto de normas de aplicación general, distintas a las que regula el Código Civil -y por ende nuestro derecho privado-, toda vez que, estamos frente a una acción que deriva de la comisión de un crimen tipificado internacionalmente, y que se encuentra por ende previsto y sancionado mediante normas contenidas en instrumentos de idéntica naturaleza ratificados por Chile; y



Foja: 1

específicamente, en lo contemplado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional – instrumento ratificado por Chile el día 06 de julio de 2009 mediante Decreto N° 104- y cuya imprescriptibilidad se encuentra expresamente regulada en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y contra la Humanidad de 26 de Noviembre de 1968, ello sin perjuicio de otros instrumentos internacionales que regulan la perpetración de acciones criminales que transgreden derechos fundamentales como la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así también, nuestra carta fundamental es coincidente con la reglamentación internacional en lo referente a crímenes contra la dignidad humana, procurando que el Estado tenga como limitación los derechos fundamentales de que son titulares las personas. El artículo quinto, inciso segundo, de nuestra Constitución prescribe que: *“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, como por los tratados internacionales ratificados por Chile”*.

Conforme lo establecido en dicho precepto legal, la responsabilidad cuya declaración se persigue en esta sede deriva de los perjuicios que se dicen causados por la comisión de una violación manifiesta y grave de los derechos y libertades contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como asimismo, en otros instrumentos Internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica antes citado; a mayor abundamiento, si se analizan los hechos que dieron lugar a la presente acción, estos acontecimientos ocurrieron, se produjeron, sin tener en consideración los derechos protegidos por los numerales 1° y 7° del artículo diecinueve de la Constitución, esto es, el derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal.

Teniendo presente entonces que el acontecimiento de los hechos provocó que se anulase todo reconocimiento de los derechos y libertades que le concernían a la víctima, no cabe sino concluir forzosamente que tanto la naturaleza como la entidad de los actos delictivos cometidos en contra del ahora demandante en 1974 no poseen correspondencia con los que el derecho privado considera como actos u omisiones ilícitas.



Foja: 1

A contrario sensu, en este caso en particular, nos encontramos ante agravios físicos y morales en contra de Derechos Humanos, crimen reconocido internacionalmente, que por ende posee una regulación supraconstitucional, que debe ser respetada y resguardada, amparando su normal desempeño.

Décimo: Que, resultaría entonces contrario a toda lógica entender que, existiendo razonamiento por parte de diversos instrumentos internacionales en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, se llegara luego a la conclusión que a la acción civil que provenga de estos delitos se le otorgue un trato distinto.

Así también se desprende del mérito de la redacción del artículo 27 de la Convención de Viena Derecho de los Tratados –instrumento ratificado mediante decreto N° 381, del año 1981 por este país-, el que expresa: *“El derecho interno y*

la observancia de los tratados Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma

se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. Este precepto legal advierte de la imposibilidad de tratar simplemente con la legislación de derecho interno a las problemáticas que se encuentren amparadas en normas internacionales, como es el caso precisamente de la controversia puesta en conocimiento mediante los presentes autos, lo que es de toda lógica si se tiene presente que hacer uso únicamente de las normas de nuestro Código Civil, podría provocar la impunidad de las responsabilidades que le atañen a nuestro Estado en crímenes de carácter imprescriptible provenientes del actuar de sus agentes.

Undécimo: Que por otra parte el artículo 2332 del Código Civil señala que: *“las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto”*; y el artículo 2514 señala que: *“la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”*; finalmente el artículo 2515 de igual cuerpo legal señala que el tiempo es de 5 años para las acciones ordinarias.



Foja: 1

Sin perjuicio de la relación de las ya mencionadas normas legales, no es menor mencionar, que el estatuto del derecho privado regula relaciones entre particulares, regidas por los principios de la autonomía de la voluntad y en consideración a un plano de relativa igualdad, cuestión inaplicable al caso de autos, donde se busca regular y sancionar en el ámbito de derecho público, relaciones verticales del Estado con los particulares, determinando las responsabilidades que éste tenga por las afectaciones de derechos por parte de sus agentes.

Duodécimo: Que, a mayor abundamiento, aun cuando la parte demandada, con la finalidad de reforzar su teoría de la prescriptibilidad de la acción, haya citado el fallo jurisprudencial emitido por nuestra Corte Suprema en autos Rol 10.665-2011, caratulada “Episodio Colegio Médico- Eduardo González Galeno”, dictada con fecha 21 de enero de 2013, lo cierto es que nuestro máximo Tribunal, con posterioridad a dicha sentencia, ha venido fallando reiteradamente bajo la convicción de que la acción civil que deriva de los hechos cometidos, atentando al dignidad humana, se encuentran amparados por el derecho internacional y por ende son imprescriptibles, reforzando así el razonamiento que viene recogiendo en el presente fallo.

Como ejemplo de lo anteriormente mencionado, siendo conocida en segunda instancia, en autos rol 15.006-2017 seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la sexta sala de dicho Tribunal arribó a la siguiente conclusión en su considerando segundo, párrafo segundo: *“En lo relativo a la prescripción que se alega, se tendrá en cuenta la jurisprudencia uniforme que existe sobre la materia, en particular lo resuelto por la Excm. Corte Suprema con posterioridad al fallo sobre unificación de jurisprudencia que se cita, en el sentido que la ley civil interna contraría de manera expresa el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación de todos los perjuicios sufridos, como lo reconoce la propia Ley 19.123, por lo que no resulta posible hacer una diferenciación entre la acción penal y la civil que emanan de los mismos hechos”*.

Este fallo fue objeto de recurso de casación en el fondo, siendo conocido ahora por nuestro Máximo Tribunal, quien mediante pronunciamiento dictado el 26 de febrero de 2019 en los autos rol 31.363-2018, ha señalado en su considerando quinto *“Quinto: Que*



Foja: 1

sin perjuicio de lo razonado en la sentencia recurrida, esta Corte tiene en consideración que la acción indemnizatoria planteada en estos autos tiene su origen en la perpetración de un delito de lesa humanidad, en que se persigue la responsabilidad del Estado por actuaciones de sus agentes que han cometido violaciones a los derechos humanos.

De esta manera, el contexto en que los hechos fueron verificados - con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales - trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada de ellos, como reiteradamente lo ha sostenido este tribunal, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, beneficios de carácter económico o pecuniario. (En este sentido, SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2015; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras).

Por lo demás, la acción civil aquí entablada en contra del Fisco tendientes a conseguir la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de sucesos queda sujeta a



Foja: 1

reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias del agravio.”

Décimo tercero: Que, pretender entonces hacer aplicable las normas de la institución de prescripción establecidas en nuestro Código Civil, implicaría vulnerar la regulación internacional de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por consiguiente, conforme a la situación de autos y por considerar que el hecho de la aplicación de la prescripción contemplada por el derecho privado supondría la vulneración de las normas internacionales señaladas latamente, lo que además provocaría dejar sin efecto lo dispuesto en artículo 38 inciso segundo de la Carta Fundamental, no cabe sino rechazar la excepción de prescripción planteada por el Fisco, tanto desde la perspectiva de la prescripción de delitos o cuasidelitos contenida en el artículo 2332 del Código Civil como desde la perspectiva de la prescripción establecida en el artículo 2515 del citado cuerpo normativo.

En cuanto al fondo.

Décimo cuarto: Que, entrando ahora al fondo de la acción, y teniendo presente que no sólo se encuentra acreditada la responsabilidad del Estado de Chile, sino además que este es un hecho pacífico en autos, cabe ahora pronunciarse sobre la petición indemnizatoria del demandante.

Décimo quinto: Que, en lo tocante daño moral sufrido por los actores a consecuencia de los actos de lesa humanidad sufridos por sus personas, se hace del todo necesario analizar la prueba documental rendida al efecto.

Décimo sexto: Que, si bien de la prueba documental aportada por los demandantes no se advierte probanza alguna que dé cuenta de los antecedentes de las detenciones sufridas por estos tres demandantes, características de las mismas, y sobre los vejámenes vividos en dichos periodos de detención, más allá de la declaración de las propias víctimas sobre los hechos que realizare ante profesional del área psicológica –



Foja: 1

folio 1- lo cierto es que, como se dijera, el Fisco de Chile no ha controvertido ninguno de los hechos expuestos en torno a las detenciones sufridas por los tres actores, las épocas en que acontecieron, el periodo de duración de cada una de ellas, y los vejámenes sufridos en dicha instancia, por lo que, lo que corresponde en este caso es analizar la entidad del daño alegado e invocado y su consecuencial indemnización.

Décimo séptimo: Que, entonces, en lo tocante a la entidad del daño consta en folios 50 y 52 haberse incorporado oficio del programa PRAIS, mediante el cual se adjunta un informe psicológico de atención psicológica, emitido por doña Carolina Barría Poveda, Psicóloga del Programa PRAIS quien realizó una atención a los tres demandantes, refiriendo:

Doña Jertrudis Yolanda Mella Correa se encuentra en calidad de Titular del Programa PRAIS, conforme N° de ingreso 987, y con ingreso al programa el 12 de febrero de 2001, quien no cuenta con antecedentes de tratamiento psicológico en PRAIS a la actualidad, pero tras la realización del informe clínico de daño se pesquisa en la actualidad trastorno afectivo bipolar, siendo considerable el daño psíquico producto de los malos tratos recibidos.

Doña Patricia Mella Correa se encuentra en calidad de Titular del Programa PRAIS, conforme N° de ingreso 730, y con ingreso al programa el 11 de enero de 2002, quien no cuenta con antecedentes de tratamiento psicológico en PRAIS a la actualidad, pero tras la realización del informe clínico de daño se pesquisa en la actualidad que existen recuerdos latentes de lo acontecido tras su detención, provocando conmoción al recuerdo de los hechos represivos, los que repercuten en las actividades del diario vivir.

Don Juan Raúl Lorca Muñoz se encuentra en calidad de Titular del Programa PRAIS, conforme N° de ingreso 737, y con ingreso al programa el 26 de febrero de 2001, quien no cuenta con antecedentes de tratamiento psicológico en PRAIS a la actualidad, pero tras la realización del informe clínico de daño se pesquisa en la actualidad que presenta variados síntomas asociados a malestar psicológico significativo, siendo considerable el daño psíquico producto de los malos tratos recibidos, los que raen constantemente recuerdos de esa época, presentando insomnio y alteraciones del sueño, lo que se complementa con cuadro de fobia a la oscuridad.



Foja: 1

Hace presente sin embargo la profesional que estas entrevistas no constituyen informe psicológico.

Décimo octavo: Que, consta también en folio 1 tres certificados emitidos por don Juan H. Diaz Menares, médico Psiquiatra, emitidos el 19 de diciembre de 2020, quien refiere que los demandantes padece de Estrés Post Traumático, y si bien cada uno de los instrumentos no indica la metodología aplicada para establecer el diagnóstico, sí refiere que se debe a las detenciones sufridas por cada actor.

Décimo noveno: Que, en consecuencia, se ha logrado establecer la existencia de un perjuicio desde la perspectiva extrapatrimonial o también llamado en la doctrina y jurisprudencia daño moral, que tiene como origen precisamente las vejaciones y dolencias que sufrieron los demandantes a propósito de sus detenciones durante el periodo del Golpe de Estado Militar, provocando el ya mencionado estrés post traumático, lo que no puede ser dejado de lado a la hora de determinar la existencia del daño moral.

Además, el informe de entrevista evacuado por la profesional del programa PRAIS que para el caso en comento la vida de los actores se ha visto afectada por las situaciones.

Refuerzan estos dichos las declaraciones de los testigos que rola en folio 43, quien se hallan contestes en señalar que los tres demandantes se vieron afectados por apremios ilegítimos con ocasión de las detenciones sufridas, reiterando el primer testigo los dichos del Sr. Lorca, en tanto que la segunda testigo reitera lo expuesto por la Sra. Patricia Mella, agregando que la actora se quiebra y por años ha sido una persona insegura, está como paranoica.

Y, aun cuando los testigos nada indiquen sobre las secuelas vividas por la Sra. Jertrudis Mella, también demandante, lo cierto es que, esta litigante soportó al igual que don Juan un largo proceso de detención, siendo privada de su libertad por un periodo de dos años entre octubre de 1973 y octubre de 1975, conforme lo indica el Certificado emitido por el Control Penitenciario de Gendarmería de Chile y aparejado en folio 1, por lo que sus secuelas pueden ser igualmente reconocidas a la luz de esta circunstancia.



Foja: 1

Vigésimo: Que, conforme a ello, este Sentenciador es de la opinión de acoger la demanda indemnizatoria, cuantificando el daño sufrido por los demandantes en la suma de \$30.000.000.- respecto de cada uno de los demandantes, cuyas experiencias traumáticas que motivan la demanda son muy similares

Vigésimo primero: Que, finalmente, en relación a los intereses y reajustes solicitados, no existiendo norma expresa que declare la imposibilidad de condenar al Fisco de Chile al pago de intereses y reajustes, y teniendo presente el carácter declarativo del proceso, la suma ordenada pagar sólo devengará intereses y reajustes, una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la sentencia, y hasta su pago efectivo.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, artículos 1698, 2541, 2515, 2332, del Código Civil, artículos 1, 4, 6, 7, 19, 38 y demás normas pertinentes de la Constitución Política de la República, Convención Americana de Derechos Humanos, Estatuto de Roma de la Corte Internacional, Convención de Viena sobre los derechos de los Tratados, y demás normas pertinentes, se resuelve:

I.- Que se rechaza la excepción perentoria de improcedencia de la indemnización por aplicación de justicia transicional que deriva en la reparación integral de la víctima incoada en primer lugar como defensa por el Fisco de Chile.

II.- Que se rechazan las excepciones subsidiarias de prescripción extintiva, tanto aquella amparada en el artículo 2332 como aquella amparada en el artículo 2515, ambos del Código Civil.

III.- Que se acoge la demanda interpuesta en folio 1 por doña Jertrudis Yolanda Mella Correa, doña Patricia Mella Correa, y don Juan Raúl Lorca Muñoz, en cuanto se declara que el Fisco de Chile es responsable civilmente por los hechos de que fueran víctimas los actores, como ya se dijera, debiendo el demandado pagar una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por daño moral consistente en las siguientes sumas:

a) Respecto de doña Jertrudis Yolanda Mella Correa, la suma de \$30.000.000.-



C-975-2023

Foja: 1

b) Respecto de doña Patricia Mella Correa, la suma de \$30.000.000.-

c) Respecto de don Juan Raúl Lorca Muñoz, la suma de \$30.000.000.-

IV.- Que las sumas ordenadas pagar devengarán reajustes e intereses desde que el presente fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo.

V.- Que no se condena en costas a la demandada, por estimar el tribunal que litigó con motivo plausible.

Regístrese, notifíquese, elévese en consulta si no se apelare, y archívese en su oportunidad.

Rol N° C-975-2023

Dictada por don Andrés Fraser Pinto, Juez Titular de este Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Rancagua, veinticuatro de Junio de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXNJXXLXTHJ

